**DESCONFIANZA**

México padece una crisis de credibilidad y de falta de confianza en las instituciones que lo gobiernan. De acuerdo con las mediciones de GEA-ISA, cuatro de cada diez ciudadanos no le cree nada al Presidente Peña Nieto, esto es más del doble de los que en su momento pensaban lo mismo de los dos presidentes anteriores. Asimismo, menos de 10 por ciento de la población manifiesta confianza en el gobierno federal, los gobiernos estatales, los legisladores, la policía y los juzgados.

En el plano filosófico (Fukyama *dixit*), la confianza es una especie de capital social que facilita el desarrollo de los países. Cuando esta no existe, la forma en la que los miembros de una sociedad cooperan es imponiéndose reglas y contra-reglas, en donde unos se cuidan de los otros y se obligan a cumplir los acuerdos, a veces por medios coercitivos. Esto ocasiona que la interacción social sea costosa, lo que inhibe la actividad y el desarrollo económico.

En un terreno más práctico, la falta de confianza ocasiona que se posterguen las decisiones de los consumidores respecto a su gasto, especialmente en bienes durables o inmuebles, o las de inversión productiva de las empresas. Cuando un buen número de consumidores y de empresarios se retraen colectivamente de sus planes, por desconfianza, la economía corre el riesgo de frenarse. En mal momento surge este problema, justo ahora que por fin la economía va en ascenso y ha llegado a su nivel normal de crecimiento del PIB (3.2 por ciento en diciembre pasado).

Según las últimas mediciones del INEGI, el nivel de confianza sobre el futuro de la economía familiar en los próximos doce meses fue 3 por ciento inferior en diciembre pasado a la observada al inicio del gobierno actual. De la misma forma, los empresarios de la construcción, las manufacturas o el comercio manifiestan un nivel de confianza más bajo, en un rango entre 7 y 20 por ciento, con relación a los niveles registrados al inicio de este sexenio. Ciertamente estos componentes de confianza han retrocedido.

El decálogo de las medidas para combatir la inseguridad anunciado y las acciones ejecutivas anticorrupción explicadas por el Presidente de la República no han restaurado la confianza perdida. Por ello es alentador que el Secretario de Hacienda comience a reorientar el discurso oficial, destacando la urgencia de recuperar la confianza ciudadana. En una entrevista reciente con el Financial Times el Secretario Videgaray dijo “Podríamos hacer 10 reformas energéticas, que si no incrementamos la confianza no podremos aprovechar el potencial de la economía”. Tiene toda la razón. El asunto está en que se acabó la hora de los discursos y ha comenzado la de las acciones, que por más que uno busca no aparecen.

En lo externo una recuperación moderada del precio del petróleo o del tipo de cambio abonarían a la confianza. No obstante, son factores completamente ajenos a México. Ojalá ocurran, pero no hay forma de diseñar una estrategia alrededor de esto. En el tema de seguridad el gobierno finca su propaganda en que los delitos, especialmente homicidios violentos y secuestros, han disminuido. No obstante, la percepción pública es que la inseguridad sigue siendo el problema principal del país y los especialistas dudan de la veracidad de las cifras oficiales, que cada vez más están en entredicho.

Queda entonces el expediente de la corrupción. Se dice que la legislatura está lista para construir un sistema nacional anticorrupción. Si es eficaz será bienvenido, pero sus efectos tal vez tomen más tiempo del que la paciencia nacional está dispuesta a otorgar. El Auditor Superior de la Federación dice que los pillos en el gobierno son eso, pillos, no tontos.

En el corto plazo el desafío para el Ejecutivo está ahí, en mostrar que puede combatir la impunidad en el círculo de sus protegidos, encontrar algunos que sean culpables y que paguen por sus pillerías. No más verbo, la sociedad quiere resultados.

*Socio de GEA grupo de Economistas y Asociados*